



NUE 214-A-2020 (RS)

XXXXXXXXXXXXX contra el **Tribunal Supremo Electoral (TSE)**

Resolución Definitiva

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las diez horas con treinta y cinco minutos del quince de julio de dos mil veintiuno.

1. Descripción del Caso

La apelante **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** presentó recurso de apelación en contra de la resolución de referencia OIR-TSE-94-XI-2020, emitida por el oficial de información del **Tribunal Supremo Electoral (TSE)** el 12 de noviembre de dos mil veinte; notificada en esa misma fecha. De acuerdo a su escrito de apelación, la información requerida consiste en:

1. “Del expediente de mi candidatura no partidaria (CNP-07-2020): a) las firmas repetidas con el candidato XXXXXXXXXXXX, cuántas firmas, la nómina de nombres tanto las de él como las mías, para confrontar entre ambos; b) las firmas de respaldo que presenté y que resultaron que estaban afiliados con partidos políticos, necesito la nómina de nombres y con qué partidos están afiliados y cuantas para confrontar entre sí; c) los nombres de los que me dieron su firma de respaldo, así como la cantidad que no son de San Salvador”.

2. La normativa, instructivo, memorando, acuerdo u otro en donde está plasmado el procedimiento para la revisión de las firmas de respaldo para los candidatos no partidarios.

Al respecto, el oficial de información del **TSE** resolvió declarar improponible la solicitud de información presentada por **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**.

El motivo sobre la base del cual el oficial de información declaró improponible la solicitud de información antes relacionada, devino de la naturaleza de la información requerida por **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, en tanto se afirma que la misma corresponde a las competencias jurisdiccionales que ejerce el TSE, y que existe procedimiento aperturado por solicitud de candidatura no partidaria a favor de la ciudadana solicitante, con referencia CNP.07-2020, estando dicho procedimiento regulado normativamente por el calendario electoral, Disposiciones Especiales para la Postulación de Candidaturas no partidarias para las Elecciones de Diputados a la Asamblea Legislativa y Ley de Partidos Políticos. Este procedimiento, de acuerdo a lo expuesto en dicha resolución, reviste carácter jurisdiccional por las funciones que la Constitución le otorga al TSE.

En consecuencia, el ente obligado reorientó a la peticionaria a la Secretaría General del TSE, en el marco del procedimiento de reconocimiento e inscripción de su candidatura no partidaria para diputados a la Asamblea Legislativa, indicando que al hacerlo por medio del proceso de la LAIP, desnaturalizaría los procedimientos establecidos en las normativas respectivas. Por tanto, estimó que al existir un defecto insubsanable en la solicitud, la misma deviene en improponible.

La apelante interpuso el recurso de apelación ante este Instituto conforme al art. 82 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), el cual fue admitido y asignado a la comisionada Roxana Soriano Acevedo para dar trámite, impulsar el procedimiento y elaborar un proyecto de resolución.

Finalizada la etapa de instrucción de este procedimiento, la Comisionada Instructora -con la vista de la documentación que yace agregada al expediente en comento- determinó que el procedimiento quedó reducido a una cuestión de derecho, en atención a la aplicación de normas y principios establecidos en la LAIP y Ley de Procedimientos Administrativos (LPA), así como los derechos que asisten al titular de datos personales, de conformidad con el art. 102 de la LAIP y el Art. 309 del Código Procesal Civil y Mercantil. Por tanto, se procedió a dar por finalizada la instrucción del procedimiento a efecto de emitir la resolución correspondiente al caso.

2. Análisis del Caso

El examen del caso seguirá el *iter* lógico siguiente: **(I)** Elementos para diferenciar la información pública de la información de carácter jurisdiccional. **(II)** Naturaleza de la información solicitada en el caso de mérito, ordenando la entrega o no de la información requerida.

(I) A. El Art. 2 de la LAIP establece que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información generada, administrada o en poder de las instituciones públicas y demás entes obligados, de manera oportuna y veraz, sin sustentar interés o motivación alguna. Es decir que, al tenor de la citada disposición, para ejercer el derecho de acceso a la información es necesario que la información exista, haya sido generada, administrada, se encuentre en poder del ente obligado al que ha sido solicitada o que exista un mandato normativo de generarla.

En ese orden de ideas, de conformidad con el Art. 6 letra “c” de la LAIP, la información pública es aquella en poder de los entes obligados contenida en archivos, datos, bases de datos, comunicaciones y todo tipo de registros que documenten el ejercicio de sus facultades o actividades, que consten en cualquier medio, ya sea impreso, óptico o electrónico.

Dentro de esta categoría de información se encuentra la información oficiosa, que está constituida por aquella información pública que los entes obligados deberán difundir al público en virtud de lo establecido en el art. 10 de la LAIP.

Los entes obligados a la LAIP, de conformidad al art. 7, son los órganos del Estado, su dependencia, las instituciones autónomas, las municipalidades y cualquier otra entidad u organismo que administre recursos públicos, bienes del Estado o ejecute actos de la administración pública en general. De ahí que el derecho de acceso a la información pública tiene por objeto la transparencia y la rendición de cuentas continua de los actos de

gobierno; es decir, que la población se entere, sepa de qué se trata, tome noticia de los antecedentes, fundamentos y de todo lo atinente a una decisión de interés público.

Con estos puntos, podemos establecer que no se puede descartar una solicitud de información pública por el formato de preguntas en que se realice, siempre y cuando exista un soporte o registro del requerimiento de información. Al respecto la Sala de lo Constitucional dentro de la inconstitucionalidad con referencia 136-2014/ 141-2014, en resolución de fecha 15 de febrero de 2017, ha establecido que: “...*toda persona tiene el derecho a conocer la manera en los gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan, y de ello deriva el derecho de acceso a la información pública. Además, **la información pertenece a las personas, no es propiedad del Estado y el acceso a ella no se debe a la gracia o favor del gobierno, sino a la titularidad que se tiene sobre este derecho fundamental. Los servidores públicos disponen de la información precisamente en su calidad de delegados del pueblo o representantes de los ciudadanos...***”.

B. Por otra parte, la información jurisdiccional, es aquella que se encuentra bajo el amparo del art. 9 del Código Procesal Civil y Mercantil, que literalmente establece: “*Las audiencias de todos los procesos previstos en este Código serán públicas, salvo que el juez, de oficio o a instancia de parte, disponga lo contrario por razones de seguridad nacional, de moral o de orden público, o de protección de la privacidad de alguna de las partes.*

La restricción de la publicidad de las audiencias deberá acordarse en resolución debidamente motivada, en la que se precisen de manera expresa y clara las razones de dicha restricción, así como la determinación de quienes, además de las partes, sus apoderados o representantes, podrán estar presentes en las mismas.

Las partes, sus apoderados, representantes, los abogados y cualquiera otra persona que alegue algún interés jurídicamente protegido, tendrán acceso al expediente judicial.” (negrita y subrayado propio)

En tal sentido, el acceso al contenido de procesos jurisdiccionales está restringido exclusivamente a las partes intervinientes y a aquellas personas que tengan un interés

legítimo en el mismo. Lo cual se traduce a que el acceso a la información generada, obtenida y en poder de los tribunales, durante la tramitación de dichos procesos, por exclusión no es información pública, sino información jurisdiccional.

En este punto es válido hacer el análisis de la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, dentro del expediente con referencia 7-2006, en la resolución emitida el veinte de agosto de dos mil catorce, en la cual denominó ***información jurisdiccional***, *todo aquel dato que constate la existencia o realización de un acto que tiene efectos o consecuencias directas o indirectas en un proceso o procedimiento tramitado ante autoridades que ejercen jurisdicción.*

Siendo una característica de este tipo de información, que la misma es generada o incorporada dentro de la tramitación de un proceso tramitado ante entes que ejercen jurisdicción, independientemente del soporte en el que se encuentre. En otras palabras, todo el acervo documental o de información que forme parte de ese trámite, puede ser atendible únicamente legitimando la calidad e interés que se ostenta, quedando sujeto su acceso a la decisión del tribunal decisor.

C. Otro punto importante a tomar en cuenta, respecto a la información jurisdiccional, es que no necesariamente la producción u obtención de este tipo de información, deviene de los tribunales de justicia, sino también de órganos administrativos que ostentan competencia jurisdiccional, considerando las atribuciones otorgadas por la norma constitucional.

Al respecto, la Sala de lo Constitucional¹ ha reconocido que “La jurisprudencia de esta sala ha caracterizado la jurisdicción diciendo que “... es un concepto constitucional vinculado a jueces independientes, inamovibles y sometidos únicamente al derecho positivo. integración unitaria de los funcionarios que la ejercen dentro del Órgano Judicial” (así se entiende, por ejemplo, en la sentencia de 20-VII-1999, Inc. 5-99).”[...].”Sin embargo,

¹ Recuperado el 25 de septiembre de:
<https://www.jurisprudencia.gob.sv/busqueda/showFile.php?bd=1&data=DocumentosBodega%2FD%2F1%2F2010-2019%2F2018%2F07%2FCDDD8.PDF&number=843224&fecha=10/07/2018&numero=64-2015AC&cesta=0&singlePage=false%27>

hay excepciones reconocidas por la propia Constitución, que por diversas razones separa del Órgano Judicial a ciertos entes públicos con funciones propiamente jurisdiccionales, es decir, de interpretación y aplicación del derecho para la solución de conflictos sociales, con carácter irrevocable, sin perjuicio del sistema de recursos (sentencia de 5-XII-2006, Inc. 19-2006).

En la sentencia del 13-VI-2014, Inc. 18-2014, se incluyó dentro de esas excepciones al TSE. Y precisamente, en relación con este punto, en la resolución de 19-IV-2017, Inc. 27-2015, este tribunal sostuvo que **"respecto a la competencia constitucional del TSE, esta sala ha reconocido que ella: (i) incluye *funciones jurisdiccionales*, es decir, de interpretación y aplicación del derecho para la solución de conflictos sociales, con carácter irrevocable; (ii) se sujeta al principio de unidad jurisdiccional, como un modo específico organización y funcionamiento del órgano decisor: independencia, imparcialidad, responsabilidad y predeterminación legal y no discriminatoria de sus funcionarios; y (iii) tiene una materia o especialidad electoral que se relaciona directamente con la protección o garantía de principios y derechos fundamentales imprescindibles para el sistema democrático salvadoreño".** (negritas suplidas)

Lo anterior, corrobora que el TSE, no obstante ser un órgano de naturaleza Administrativa, ejerce una doble función, de acuerdo a las competencias otorgadas por la Constitución, lo cual debe tomarse en cuenta al momento de tramitar una solicitud de información, a efecto de valorar el tipo de petición que se realiza.

D. De lo anterior, se advierte que la LAIP otorga atribuciones a este Instituto exclusivamente para conocer lo referente a la promoción, garantía y aplicación del Derecho de Acceso a la Información Pública, no existiendo atribución legal para ejercer un control o dirimir conflictos relacionados a información jurisdiccional.

Bajo este contexto, es procedente verificar el requerimiento de información realizado por la ciudadana **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, en su solicitud de información, a fin de determinar si su contenido responde al Derecho de Acceso a la

Información, o si por el contrario, la apelante debe utilizar un medio distinto para su obtención.

(II) Entonces, expuesto lo anterior, es procedente determinar la naturaleza de la información solicitada en el caso de mérito, para lo cual se realizan las siguientes valoraciones:

Requerimiento de información	Características	Tipo de información
<p>1. Del expediente de mi candidatura no partidaria (CNP-07-2020):</p> <p>a) Las firmas repetidas con el candidato XXXXXXXXXXXXX, cuántas firmas, la nómina de nombres tanto las de él como las mías, para confrontar entre ambos;</p> <p>b) Las firmas de respaldo que presenté y que resultaron que estaban afiliados con partidos políticos, necesito la nómina de nombres y con qué partidos están afiliados y cuantas para confrontar entre sí”;</p> <p>c) Los nombres de los que me dieron su firma de respaldo, así como la cantidad que no son de San Salvador.</p>	<ul style="list-style-type: none"> El contenido de los tres requerimientos, se encuentra íntimamente relacionado al fondo del procedimiento de solicitud de candidatura no partidaria, con referencia CNNP.07-2020 y forman parte de dicho expediente. La ciudadana XXXXXXXXXXXXX, se encuentra legitimada para realizar cualquier solicitud e incluso acceder al expediente de su solicitud de candidatura no partidaria. 	Información jurisdiccional
<p>2. La normativa, instructivo, memorando, acuerdo u otro en donde está plasmado el procedimiento para la</p>	<ul style="list-style-type: none"> El marco normativo aplicable al TSE, es información pública oficiosa, según lo establecido 	Información

revisión de las firmas de respaldo para los candidatos no partidarios.	<p>en el art. 10 numeral 1, de la LAIP.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La entrega de la misma no interfiere en la tramitación del procedimiento con referencia CNNP.07-2020. 	Pública oficiosa de conformidad al art. 10 numeral 1 de la LAIP.
--	---	--

Por tanto, se puede tener por establecido que si bien se ha realizado una serie de requerimientos de información, al corroborar en qué consiste el fondo de lo solicitado, se puede advertir que el requerimiento 1 corresponde a información de naturaleza jurisdiccional, puesto que lo solicitado obedece a datos contenidos y resguardados dentro de un expediente que tramita el TSE como parte de sus atribuciones jurisdiccionales; mientras que el requerimiento de información 2, si corresponde a información pública de naturaleza oficiosa, al tratarse de acceder a normativa aplicable por el TSE, por lo que es procedente ordenar la entrega de esta última en este acto.

Aunado a ello, no obstante existir en la misma solicitud dos categorías distintas de información (jurisdiccional y pública oficiosa), se exhorta al oficial de información del TSE, que en lo consecuente se realice un análisis integral de la normativa aplicable a cada caso; es decir, una interpretación que potencie el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, haciendo un estudio de cada uno de los requerimientos de información realizados y tomando en cuenta la doble naturaleza del TSE, a efecto de no dilatar de manera innecesaria la tramitación de una solicitud de información.

3. Decisión del caso

Por lo tanto, de conformidad con las razones antes expuestas, y con base en las disposiciones legales citadas y en los Arts. 2, 6, 18, 85 y 86 de la Cn.; 94, 96 letra “d” y 102 de la LAIP, este Instituto **resuelve:**

a) Modificar el contenido de la resolución emitida por el oficial de información del **Tribunal Supremo Electoral (TSE)**, a las ocho horas con treinta minutos del 12 de noviembre de 2020, bajo referencia OIR-TSE-94-XI-2020; por los motivos expuestos en la presente resolución.

b) Ordenar al titular o autoridad máxima del **Tribunal Supremo Electoral (TSE)** que, por medio de su oficial de información, dentro del plazo de **diez días hábiles** contados a partir del siguiente a la notificación de esta resolución, dé trámite al requerimiento de información número 2, de la solicitud de información presentada por la ciudadana **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, consistente en: “2. *La normativa, instructivo, memorando, acuerdo u otro en donde está plasmado el procedimiento para la revisión de las firmas de respaldo para los candidatos no partidarios*”; con la finalidad de que esta información pueda ser entregada a la apelante, por ser información de naturaleza pública oficiosa. Dicho trámite deberá realizarse conforme a lo establecido por la LAIP.

c) Ordenar al titular o autoridad máxima del **Tribunal Supremo Electoral (TSE)** que, en el término de **veinticuatro horas**, luego de fenecido el plazo indicado anteriormente, remita a este Instituto un informe de cumplimiento de la orden contenida en el literal “b” de esta parte resolutive; bajo pena de iniciar el procedimiento administrativo sancionador correspondiente. Este informe deberá ser remitido a la dirección electrónica: oficialreceptor@iaip.gob.sv.

d) Hacer saber a las partes que contra este acto administrativo no cabe recurso en esta sede administrativa, dejando expedito el derecho de acudir a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, si así se considerase necesario.

e) Remitir el presente expediente a la **Unidad de Cumplimiento** de este Instituto para verificar la ejecución de esta resolución.

f) Publíquese esta resolución oportunamente.

Notifíquese. -

-----D.H.S-----R.GÓMEZ-----A.GREGORI-----

**PRONUNCIADO POR LAS COMISIONADAS Y EL COMISIONADO QUE LO
SUSCRIBEN. "RUBRICADAS"**

SD/JH